

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **YANETH TAMAYO MOLINA** contra **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado No. **05001-31-05-022-2018-00143-01**.

AUTO:

De conformidad con el memorial de sustitución de poder, allegado vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de Colpensiones en este proceso, se procede a reconocer personería a la abogada CLAUDIA MILENA GUARÍN GARCÍA identificada con C.C. No. 1.038.413.681 y portador (a) de la T.P. No. 306.473 del C.S de la J, para que represente a COLPENSIONES en este proceso como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la demanda, que se condene a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de pensión especial de vejez por hijo en condición de discapacidad, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata la actora, que entre 1984 y la actualidad ha cotizado más de 1300 semanas al sistema pensional.

Relata que es madre soltera, y tiene un hijo llamado JUAN ESTEBAN PÉREZ TAMAYO, quien cuenta con una merma de capacidad laboral del 60%, por padecer síndrome de down, quien además depende económicamente y afectivamente de ella, pues su padre fue judicialmente privado de la patria potestad, por lo que ejerce solo ella.

Aduce que BBVA HORIZONTE, entregó en tres oportunidades (01 de octubre de 2007, y 01 de abril y 01 de octubre de 2008), sendos extractos de semanas cotizadas por la demandante, donde aparece registrado que cotizó entre el 1 de enero de 1991 y 31 de diciembre de 1994, con la empleadora MÓNICA GAVIRIA MEJÍA número de empleador 2018212857

Expresa que COLPENSIONES le ha entregado en varias oportunidades historia laboral donde no se registran las más de doscientas semanas laboradas con la empleadora antes citada.

Indica que presentó el 28 de mayo de 2013 al igual que el 2 de mayo de 2017 reclamación a COLPENSIONES para que incluyera en el historial las semanas cotizadas antes referidas, peticiones de las que la primera no fue respondida y de la segunda se le requirió para que presentara los soportes de la relación laboral con la señora MÓNICA GAVIRIA MEJÍA, obviando que con la reclamación se presentaron copias de los extractos del 28 de febrero de 2008 y del 7 de julio de 2008 (se trata de los extractos de BBVA HORIZONTE PENSIONES S.A.)

Refiere que el 5 de febrero de 2018 presentó ante COLPENSIONES solicitud de reconocimiento de la pensión especial de vejez, la que le fue negada aduciendo que solo acredita 1.117 semanas cotizadas a 28 de febrero de 2018.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de la primera instancia despachó desfavorablemente las pretensiones de la demandada, argumentando que la actora no probó haber cotizado las 1300 semanas que se requieren para obtener la pensión especial de vejez demandada, pues no se encuentra probado que haya laborado con afiliación al ISS desde el 01 de enero de 1991 con la empleadora MÓNICA GAVIRIA MEJÍA como lo aducía en la demanda.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

El apoderado de la demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, aduciendo que la apela respecto de la aparente insuficiencia de semanas cotizadas por la demandante para acceder a la pensión especial de vejez, pues el juez que aduce que no encuentra prueba en el expediente que permitan conocer fehacientemente la cotización o la existencia del periodo laboral entre el primero de enero del 91 y el 31 de diciembre del 94, y que solo encontró probado el periodo comprendido entre el 28 de julio del 93 y el 31 de diciembre del 94, es decir, 74.57 semanas que sumadas a las que se ha reconocido por el demandante y por la administradora del fondo de pensiones suman cerca de 1200.

Expresa que la única prueba documental que se analizó fue precisamente la que tenía todo el mérito probatorio que, está reconociendo COLPENSIONES, que hay un debito pendiente de cobrar entre el primero de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1994 e inclusive dice el apunte que la deuda estaba por un total de \$861.000.

Aduce que nuevamente presenta el pantallazo correspondiente que se encuentra en el expediente electrónico de la demandante en la carpeta de historias laborales, que acredita el señor juez de primera instancia, lo que nos indica de una parte hasta mala fe, de la administradora de pensiones PORVENIR pese a que reconoce que hay un término compilado entre el 28 de julio del 93 y el 31 de diciembre del 94, no lo sumó a las semanas cotizadas, ese periodo no aparece registrado esas 74.57 semanas.

Ahora, manifestó también el despacho que la demandante no aportó prueba acerca de la relación laboral con la señora MÓNICA GAVIRIA entre el primero de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1994, lo cual esta erróneamente apreciado, pues tal como se citó en los alegatos de cierre a folio 35, 43 y 47 aparece la relación de esas semanas cotizadas, son documentos originales que estaban en poder de la parte actora, se aportaron al expediente y en ningún momento se hizo tacha de falsedad contra los mismos, como dispone el Código General del Proceso. Por lo tanto, lo allí plasmado debe tenerse como cierto. Es verdad que en esos documentos aparecen son periodos diferentes, pero por favorabilidad que es uno de los principios que regula el derecho procesal laboral debió reconocer el periodo más amplio y no el más corto porque es que esos tres documentos diferentes del fondo privado de pensiones del BBVA – HORIZONTES aparece registrado de esa manera. Ahora que era raro que el BBVA – HORIZONTE aportara esas semanas cotizadas, es que ese historial de cotizaciones venía del instituto de Seguros Sociales, lo único que hizo BBVA –

HORIZONTES fue registrarlos allí. Mire que en ese documento de COLPENSIONES, el reporte de semanas cotizadas en el periodo del 67 al 94 aparece un ingreso, cambio de salario, otro cambio de salario y un cambio de sistema, pero mire que a folio 2 de esa documental, aparece que el débito a cobrar es del 910101 al 94 12 31, es decir, los cuatro años completos y así lo encontró aprobado el despacho que en ningún momento hizo gestión alguna la administradora para adelantar las gestiones de cobro o declarar deuda incobrable, esa no es una carga que deba asumir la demandante.

Finaliza el apoderado de la demandante solicitando que, con base en lo anterior, sea revocado el fallo de primera instancia y se tengan en cuenta la documentación de los folios 35, 43 y 47 con los reportes de semanas cotizadas BBVA – HORIZONTES y el reporte que hace COLPENSIONES en el expediente electrónico carpeta de historia laboral en el documento citado por el señor juez porque está completo el lapso que viene alegándose para completar las 1300 semanas.

4. ALEGACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente la apoderada de la entidad demandada COLPENSIONES, presentó alegatos, argumentando resumidamente que solicita sea confirmado el fallo de primera instancia, pues se ha establecido por la normatividad que el patrono está obligado a entregar al instituto, a través de la caja seccional u oficina local que corresponda a su jurisdicción en el plazo y forma que determine el reglamento de aportes y recaudos, la totalidad de las cotizaciones, que sean de su cargo y las que deben ser satisfechas por el asegurado. Por lo tanto, es evidente que los empleadores son los obligados a realizar los aportes de pensión, de acuerdo con el salario o ingresos que se hayan devengando en la relación laboral.

Del proceso se demostró que el aportante MONICA GAVIRIA MEJIA, en los periodos desde 199101 hasta 199306, no efectuó ninguna cotización en el Sistema General de Seguridad Social a su nombre, tampoco por los ciclos 199307 al 199412, razón por la cual no era improcedente contabilizarlos en la historia laboral de la accionante.

Ahora respecto a la pretensión específica de pensión anticipada de vejez por hijo en condición de discapacidad, como primer aspecto, para acceder a tal pensión anticipada, no se tendrá contemplada la edad exigida en la norma, es decir, siete

(57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre, pero se deberán acreditar las semanas cotizadas mencionadas en la norma vigente, las cuales corresponde a 1.300, por lo tanto, revisada la historia laboral de la demandante, se evidenció que acredita un total de 1.155,71 semanas, así las cosas, no cumpliría con el tiempo requerido para realizar el reconocimiento de la prestación económica bajo las condiciones solicitadas.

Ahora bien, como segundo aspecto, se aclara que si bien la prestación económica pretendida deberá acreditar un mínimo de semanas cotizadas, también lo es que deberá demostrar que el padre o la madre son cabeza de familia, por cuanto esta pensión anticipada de vejez lo que busca es generar un beneficio a dichos padres y madres con hijos en condición de discapacidad, que, por razones de su trabajo, no puedan atenderlos, toda vez que requieren de su trabajo por ser el sustento familiar, debido que sus miembros dependen económicamente de esa persona. Mencionado lo anterior, el padre o madre cabeza de familia deberá garantizar que tiene a cargo la responsabilidad económica y social con su núcleo familiar, en este orden de ideas, y si bien es cierto, de acuerdo con el expediente pensional obra dictamen emitido por Colpensiones No. 2016139978KK de fecha 20 de febrero de 2016, en el cual acredita que el joven Juan Esteban Pérez Tamayo acredita una discapacidad equivalente al 60% por padecer síndrome de Down, por lo tanto, si existe cónyuge, compañera permanente o el padre del menor, sería necesario probar que el mismo se encuentra en un estado de incapacidad física, sensorial o psíquica, es decir, en una deficiencia sustancial para la ayuda y cuidados del menor.

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER.

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la demandante probó en el proceso, cumplir los requisitos que exige el Parágrafo 4to. del art. 9 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión especial de vejez que esta norma regula. De asistirle derecho a la pensión a la actora, se determinará desde cuándo comienza su disfrute, y si son procedentes los intereses moratorios el Art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Tramitado el proceso en legal forma y no avizorándose hecho que conlleve a su nulidad, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación, conforme a lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

Para resolver la apelación, sea lo primero manifestar, que la pensión anticipada de vejez por hijo invalido a cargo, está consagrada en el Inciso 2º del Parágrafo 4to. del art. 9 de la Ley 797 de 2003, que es del siguiente tenor literal:

“La madre trabajadora cuyo hijo padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral.”

Frente a la norma en cita, se ha de precisar que la prestación que ella establece, inicialmente fue concebida en favor de las madres con hijos afectados por una situación de estado de invalidez física o mental que dependieran económicamente de su progenitora, y se hizo extensiva a los padres en similitud de circunstancias, en virtud de sentencia C-989 de 2006 de la Corte Constitucional.

De otra parte, en cuanto a los requisitos para acceder a la pensión anticipada de vejez por hijo en situación de discapacidad, la SCL de la Corte Suprema de Justicia, en su línea jurisprudencial, entre otras en las sentencias SL17898-2016, SL12931-2017 y SL 1790-2018, ha señalado que se deben cumplir los siguientes requisitos:

- 1) *Que la madre, o el padre, haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos, el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez;*
- 2) *Que el hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada;*
- 3) *Que la persona discapacitada sea dependiente de su madre o de su padre, según fuere el caso.*

Anotándose, además, que como condición de permanencia de esta pensión especial de vejez se requiere:

- 1) *Que el hijo permanezca en esa doble condición: afectado por la invalidez y dependiente de la madre o el padre, y*
- 2) *Que el progenitor no se reincorpore a la fuerza laboral.*

Cabe también traer a colación, la sentencia SL2530 del 04 de julio de 2018 de la misma corporación, en la que tratando el tema que nos ocupa y rememorando lo dicho en sentencia con radicación 40517 del 12 de noviembre de 2004, acotó lo siguiente:

“(La pensión especial en comento) crea la posibilidad de que el responsable familiarmente (madre o padre trabajador(a) tenga la oportunidad de brindar los cuidados al incapacitado, en el hogar, y pueda llevar a cabo esta actividad sin perjuicio de una remuneración que beneficie no solo al hijo que no puede valerse por sí mismo y recibe su sustento por cuenta de su cuidador, sino al progenitor que proporciona los servicios de cuidado. Para que, de esta manera, la madre, o el padre, pueda conciliar su necesidad de trabajar para obtener su sustento y el de su hijo, con la responsabilidad de cuidado a favor del dependiente discapacitado en el hogar.

De la lectura atenta de la norma se infiere, que la motivación del legislador para eximir al padre o a la madre del requisito de la edad para efectos del disfrute de la pensión de vejez, es que se pueda dedicar al descendiente afectado por una situación de invalidez quien requiere de la atención y cuidado por parte del progenitor del que deriva su sustento, en un grado que no le permite a éste el ejercicio de una actividad laboral distinta, lo que justifica la intervención de la seguridad social para asegurar el ingreso indispensable para la subsistencia familiar.

De allí que el precepto estipule que el beneficio se suspende si el padre o la madre trabajador (a) se reincorpora a la fuerza laboral, lo cual es un síntoma de que el descendiente ya no reclama de él o ella, esa atención prioritaria, o cuando ya no exista la condición de invalidez, es decir, desaparece la situación que justifica la presencia de la prestación de la seguridad social.

En ese orden de ideas, resulta medular en la configuración del derecho pensional especial, el grado o intensidad del requerimiento de cuidado personal del hijo afectado por el estado de incapacidad, respecto del progenitor que hace incompatible el cumplimiento de esa obligación con el desarrollo de una actividad económica remunerada, lo cual debe ser acreditado en cada caso y analizado por el juez.

Es de la esencia del precepto que los padres potencialmente beneficiarios de la pensión especial tengan a su cargo el cuidado personal del descendiente y lo ejerzan en mayor o menor medida. Eso no admite discusión alguna, pues en los eventos en que el padre o madre del hijo afectado por un estado de minusvalía estén privados del cuidado y tenencia personal por inhabilidad física o moral, por decisión judicial, o por cualquier otra razón, no tendrían vocación para acceder a esa prestación especial, por no tener jurídica o materialmente la posibilidad así quisieran, de dedicarse al cuidado personal del hijo, aunque ellos cumplieran el requisito de la dependencia económica por haber honrado sus obligaciones alimentarias o pecuniarias de todo orden.”

Es así que, conforme a la jurisprudencia de la SCL de la H. Corte Suprema de Justicia, para tener derecho al menos al disfrute de la pensión anticipada de vejez, se requiere que el padre o madre del hijo en estado de discapacidad que pretende la pensión, se haya retirado o necesite retirarse del trabajo para dedicarse de manera exclusiva o preponderante a los cuidados de su hijo inválido. Lo que además se infiere de la norma que reconoce la pensión anticipada de vejez cuando establece que **“Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral”**.

En el caso que nos ocupa, el juez si bien adujo que se encuentran probados los requisitos legales para otorgarle la pensión especial de vejez a la actora, referidos a que su hijo este en condición de invalidez, la demandante no probó el requisito de semanas mínimas cotizadas para acceder a la pensión especial de vejez, es decir las

1.300 que exige la Ley a partir del año 2.015, lo que relevaba al despacho de analizar los restantes requisitos para obtener la prestación pretendida.

Argumentó el juez, que el tiempo de cotizaciones que reclama la actora con la empleadora MÓNICA GAVIRIA MEJÍA, entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1994, no lo encuentra probado en el proceso, pues si bien en documento proveniente de COLPENSIONES denominado “REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS PERIODO 1967 – 1994” (Documento 5 del archivo denominado “HISTORIAS LABORALES”) se registra un debido cobrar de aportes al sistema pensional por un presunto periodo entre el 01 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1994, con la empleadora MÓNICA GAVIRIA MEJÍA, ello no se compagina con lo registrado en ese mismo documento, referente a la novedad de ingreso de fecha 28 de julio de 1993 que registra la demandante con la cita empleadora, por lo que concluyó que al número de semanas cotizadas que se registra en la historia laboral de la demandante, solo se le puede agregar el periodo entre el 28 de julio de 1993 y el 31 de diciembre de 1994

El apoderado de la actora insiste en que se debe tener en cuenta como cotizaciones de las que COLPENSIONES no ejerció la labor de cobro desde el 1 de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1994, fundando básicamente su argumento en que en extractos de cotizaciones de la actora provenientes de BBVA PENSIONES, se anota el referido periodo del 1 de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1994, a lo que se ha de manifestar primeramente que documentos provenientes de terceros, en principio no se puede derivar prueba en contra de una persona que no tenga asidero en otras pruebas que los puedan corroborar, y más si lo que se registra en ellas no puede ser de conocimiento directo del tercero.

De esta manera, el Artículo 262 del CGP establece lo siguiente: *“Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.”*

En este caso, los extractos provenientes de BBVA HORIZONTE sobre las cotizaciones de la demandante, en el tiempo anterior a que la actora se afilió a este Fondo de Pensiones, no se trata de un documento declarativo de lo que le pueda constar al citado Fondo, pues en tal extracto este Fondo de Pensiones, lo único que hace es registrar la información que pueda haber obtenido del ISS hoy COLPENSIONES sobre las cotizaciones de la demandantes anteriores al año 1994 que entraron a operar los Fondos de Pensiones privadas, de lo que se viene que lo

registrado en los extractos de BBVA – HORIZONTE no puede constituir prueba alguna que la demandante tuvo afiliación al ISS con la empleadora MÓNICA GAVIRIA MEJÍA, antes del 28 de julio de 1993, que se registra en el documento proveniente de COLPENSIONES, como fecha de ingreso al ISS con esta empleadora.

Es relevante que en este caso, COLPENSIONES administrativamente le dio la oportunidad a la actora que acreditar si podía haber tendido relación laboral con su empleadora MÓNICA GAVIRIA MEJÍA, desde el año 1991 para lo cual, conforme la confesión de la propia actora en los hechos de la demanda la requirió para que presentara pruebas que lo acreditaran, pero esta solo fundamenta su solicitud de que se le tenga en cuenta el periodo del 1 de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1994 como cotizado con mora de la empleadora MÓNICA GAVIRIA MEJÍA, tanto administrativamente como en la apelación, con unos extractos provenientes de terceros, que como ya se explicó no constituyen prueba de lo que en ellos se anota, sin que importe si los mismos fueron o no desconocidos por COLPENSIONES al dar respuesta a la demanda, toda vez que no se trata de documento declarativo.

Pero, es más, si la demandante hubiera probado que laboró con la señora MÓNICA GAVIRIA MEJÍA desde el 1 de enero de 1991, tampoco ello conduciría a que se le tuviera en cuenta cotizaciones desde esta fecha, pues también debía probar que la citada empleadora la afilió al sistema pensional, por cuanto si no lo hizo, debía la actora demandar a su empleadora para que fuera condena a pagar el cálculo actuarial por las cotizaciones en el tiempo que omitió la afiliación.

Conforme los argumentos de hecho y de derecho expuesto en precedencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto negó la pensión especial de vejez demandada por la actora, sin embargo, se indicará en la sentencia de esta instancia en la parte resolutive, que Colpensiones debe registrar en la historia laboral de la demandante, como válidamente cotizado el periodo entre el 28 de julio de 1993 y el 31 de diciembre de 1994 con la empleadora, pues a pesar que el juez admitió que este lapso sí se debe tener como mora del pago de la cotización por la empleadora MÓNICA GAVIRIA MEJÍA, no lo decidió así en la parte resolutive.

Y es que la Sala, comparte lo argumentado por el juez, sin decisión expresa en la parte resolutive de la sentencia, que las cotizaciones entre el 28 de julio de 1993 y el 31 de diciembre de 1994 con la empleadora, MÓNICA GAVIRIA MEJÍA, deben ser reconocidas por COLPENSIONES, no solo porque en el referido “REPORTE DE

SEMANAS COTIZADAS PERIODO 1967 – 1994”, proveniente de COLPENSIONES se registra, la novedad de ingreso el 28 de julio de 1993 con la citada empleadora, sino porque incluso COLPENSIONES en la historia laboral actualizada a julio de 2018 (documento 3 del archivo denominado HISTORIAS LABORALES del expediente administrativo) expresamente relaciona sin cotizaciones este periodo con la empleadora MÓNICA GAVIRIA MEJÍA, con la observación: *“Periodo en mora por parte del empleador”* mora que conforme la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la CSJ, sino de Corte Constitucional, no puede perjudicar al trabajar, pues la administradora de pensiones tenía la obligación de ejercer las acciones de cobro de las cotizaciones.

En razón a las consideraciones de hecho, y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada será CONFIRMADA y ADICIONADA en los términos expuestos en precedencia.

COSTAS en esta instancia a cargo de la actora, por haber sido vencida en la apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de junio de 2020, proferida por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso promovido por la señora YANETH TAMAYO MOLINA, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES.

SEGUNDO: Se ADICIONA la sentencia de primera instancia, en el sentido de DECLARAR que COLPENSIONES debe registrar en la historia laboral de la demandante, como válidamente cotizado el periodo entre el 28 de julio de 1993 y el 31 de diciembre de 1994 con la empleadora MÓNICA GAVIRIA MEJÍA.

TERCERO: COSTAS en esta instancia. Las agencias en derecho las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma, por quienes en ella han intervenido.

Los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a730c23328c99933921d0922a6d8b941ac951e8c9e19a12df66f2b08a129c3f7**

Documento generado en 27/01/2023 01:45:43 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>